

Las universidades podrán obligar a poner una segunda cámara para los exámenes

CARINA FARRERAS Barcelona

Una reciente resolución de la Agencia Española de protección de Datos (AEPD) desestima la denuncia de la asociación de estudiantes de UNIR, la universidad a distancia de La Rioja, y la de 11 particulares que se quejaba de los procedimientos de vigilancia establecidos por el campus. “No se han encontrado evidencias que acrediten la existencia de infrac-

ción en el ámbito competencial de la AEPD”, indica la resolución de la agencia.

En los exámenes de febrero del 2022, la UNIR obligó a los estudiantes a instalar, además de la cámara frontal habitual, una segunda cámara que enfocase el entorno del examinado como sus manos, cuerpo y las pantallas con las que trabajaba. Los denunciantes entendieron que el tratamiento realizado era muy intrusivo ya que la cámara podía captar y gra-

bar a los familiares que no habían dado su consentimiento de datos. Además podía captar datos almacenados en el dispositivo del alumno. Y expusieron que el consentimiento no era libre puesto que, a pesar de tener la posibilidad de realizar un examen presencial, estaban obligados a pasar por ello en caso de riesgo sanitario.

La AEPD entiende que la segunda cámara “tiene como única finalidad captar imágenes del entorno y enviarlas al encargado de tratamiento, y en caso de detectarse posible fraude se activa alerta que es revisada de forma manual por personal cualificado”.

Con respecto al software instalado en el ordenador del alumno, constata que el principal objetivo de este “es capturar el escritorio y hacer uso de la cámara frontal,

por lo que no se accede a ninguna otra información personal almacenada en el propio dispositivo, salvo que el alumno la muestre en pantalla mientras se realiza la prueba”.

La Agencia Española de Protección de Datos resuelve que la cámara no es intrusiva y no almacena datos

Y determina que “el uso de una segunda cámara no supone un riesgo adicional que pueda afectar en mayor medida a los derechos y libertades de los afectados”. Por tanto, concluye que la

medida es “necesaria y ponderada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto” y que no hay alternativa igualmente eficaz.

En sus alegaciones, la UNIR afirmó que “ninguna de las dos cámaras utiliza técnicas de reconocimiento facial”, y aportó un certificado de la empresa Smowl Tech que es el proveedor de la plataforma de exámenes online confirmando estas afirmaciones. La agencia ha verificado que la universidad no almacena modelos biométricos, que no se instala software en el dispositivo del alumno y que el acceso a la cámara del dispositivo se realiza desde una URL que solicita previamente permiso para acceder a ella.●